INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD, AJUSTES RAZONABLES Y DISEÑO UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SALAS CINEMATOGRÁFICAS, SUSCRITA POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Quienes suscribimos, Alma Lidia de la Vega Sánchez, Alma Delia Navarrete Rivera, Delhi Miroslava Shember Domínguez, Dora Alicia Moreno Méndez, Gissel Santander Soto, Hilda Araceli Brown Figueredo, María Fabiola Karina Pérez Popoca, Melva Carrasco Godínez, Monica Fernández Cesar, Omar Antonio Borboa Becerra, Ana Erika Santana González, José Alejandro Aguilar López, Santiago González Soto y Juan Antonio Meléndez Ortega, Diputadas y Diputados Federales integrantes de diversos Grupos Parlamentarios en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar un segundo párrafo al artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, a fin de garantizar el derecho de acceso a la cultura para las personas con discapacidad, mediante la implementación de funciones en salas cinematográficas que incluyan ajustes razonables y diseño universal, como medidas de accesibilidad.

Esta propuesta responde a un acuerdo tomado durante la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXVI Legislatura, para atender

una omisión legislativa determinada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)¹, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía vigente, por no contemplar las medidas necesarias que permitan el acceso efectivo al contenido cinematográfico a las personas con discapacidad visual.

De acuerdo con la Tesis 2a./J. 69/2024 (11a.), en su forma actual, dicho artículo prevé la exhibición de películas con subtítulos como medida de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, pero omite cualquier previsión en favor de las personas con discapacidad visual, *“al no establecer que las películas exhibidas en las salas de cine se encuentren dobladas al español y con audio descripción como medida razonable para garantizar su derecho a la accesibilidad”*, lo que constituye una exclusión directa en el ejercicio del derecho fundamental a la cultura. Dicha omisión perpetúa la desigualdad estructural y vulnera el principio de igualdad sustantiva.

La Segunda Sala de la SCJN sostiene que *“[e]l derecho a la accesibilidad no sólo implica identificar barreras y eliminarlas, pues la obligación de las autoridades no se agota con implementar medidas iniciales para que las personas con discapacidad puedan acceder, en este caso, al contenido de las películas. También implica garantizar que puedan hacer uso de las medidas de accesibilidad y erradicar cualquier barrera del ambiente que evite el uso de esas herramientas en igualdad de condiciones”*.

La SCJN advierte que el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía:

- Prevé que las películas sean exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en favor de las personas con discapacidad auditiva.
- Pero omite considerar a las personas con discapacidad visual, a quienes injustificadamente se les impide acceder a las películas por medio del doblaje y

¹ Tesis [J.]: 2a. 69/2024. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Libro 40, Agosto de 2024, Tomo V, Volumen 1, Página 197. Registro Digital: 2029352.

la audio descripción, restringiendo su participación en la vida cultural a través de formatos accesibles.

Este vacío **genera una omisión legislativa relativa**, ya que **el legislador sí reguló medidas de accesibilidad para un grupo de personas con discapacidad**, pero **omitió hacerlo para otro grupo igualmente protegido por el marco constitucional y convencional lo que en la realidad abre brechas en el ejercicio del derecho a disfrutar de un bien cultural**. La SCJN amplía la interpretación del derecho a la accesibilidad conforme a los principios de **igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación**.

Es decir, el Estado no cumple su obligación con medidas genéricas o iniciales, sino que debe **garantizar resultados reales**, permitiendo que todas las personas, independientemente de su condición, **puedan ejercer sus derechos culturales en igualdad de condiciones**.

Dada la relevancia de la sentencia que dio origen a la Tesis 2a./J. 69/2024 (11a.), y considerando que las cuestiones jurídicas no deben permanecer ajenas a las luchas cotidianas por los derechos humanos, quienes suscribimos la presente iniciativa deseamos reconocer el trabajo realizado por el ciudadano Óscar Horacio Ortega Morales, persona con discapacidad visual permanente, quien promovió en su momento un juicio de amparo indirecto en contra del artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, e interpuso posteriormente un recurso dentro del Amparo en Revisión 14/2023, ante el sobreseimiento dictado en dicho proceso. Lo anterior, al considerar que, si bien la norma impugnada tenía por objeto reducir la brecha de inclusión respecto de las personas con discapacidad auditiva, **omitía contemplar a las personas con discapacidad visual**, lo cual a su juicio, implicaba la vulneración a los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a participar en la vida cultural mediante formatos accesibles².

² Sentencia recaída al Amparo en Revisión 14/2023, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Ministra Yasmín Esquivel Mossa, 6 de marzo de 2024.

1. Modelo Social y de Derechos Humanos de la Discapacidad en que se Sustenta la Iniciativa.

Para comprender mejor la relevancia de armonizar el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, se hace necesario observar que el concepto de discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, dando lugar a distintos *modelos explicativos* que reflejan formas de comprender la diversidad funcional y de estructurar las políticas públicas, leyes y servicios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconocen esta evolución como clave para transitar hacia sociedades más igualitarias.

a) Modelo de Prescindencia (Exclusión).

Se remonta a épocas antiguas y fue dominante hasta el siglo XIX. Considera la discapacidad como una “anomalía” incompatible con la vida útil o productiva. Las personas con discapacidad eran vistas como objetos de caridad, piedad o relegadas a instituciones de encierro (asilos, orfanatos, manicomios). Se considera que no tienen capacidad para aportar a la sociedad.

Las implicaciones de este modelo son que justifica la exclusión social total, no reconoce derechos ni autonomía y refuerza la visión de la discapacidad como carga social.³

b) Modelo Médico o Rehabilitador.

³ Naciones Unidas, “Informe Mundial sobre la Discapacidad”, OMS – Banco Mundial, 2011.

Surge con el avance de la medicina moderna, define la discapacidad como un problema individual, resultado de una deficiencia o enfermedad cuya atención se centra en “curar”, “rehabilitar” o normalizar a la persona para ajustarla a la sociedad.

Las implicaciones de este modelo son que reproduce la visión de que el problema radica en el cuerpo de la persona, reduce a la persona a su condición médica y justifica prácticas paternalistas y no participativas.⁴

c) Modelo Social de la Discapacidad.

Surge de los movimientos de personas con discapacidad en los años 70 y 80 del siglo XX. Sostiene que la discapacidad no reside en la persona, sino en las *barreras sociales, físicas, normativas y actitudinales* que impiden su participación plena. Introduce el concepto de *barreras estructurales* y exige la transformación del entorno.

Las implicaciones de este modelo son que el enfoque cambia de la *adaptación de la persona a la adaptación del entorno*, reconociendo el derecho a la inclusión, igualdad sustantiva y no discriminación, por lo que exige la adopción de **ajustes razonables y diseño universal**.⁵

La adopción del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad representa un cambio de paradigma imprescindible para romper con siglos de exclusión, discriminación y paternalismo. Este modelo reconoce la dignidad y agencia de las personas con discapacidad, y obliga a los Estados, como el mexicano, a construir entornos, leyes y servicios accesibles, inclusivos y justos.

d) Modelo de Derechos Humanos de la Discapacidad.

⁴ Organización Panamericana de la Salud, “Guía práctica de salud pública basada en derechos humanos”, 2006.

⁵ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 1, 2 y 3 y Observación General No. 1 del 2014 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.

Constituye la evolución del modelo social, impulsada por el sistema internacional de derechos humanos en el que se reconoce a las personas con discapacidad como **titulares de derechos humanos plenas**, de ahí que integra los principios de **autonomía, dignidad, igualdad sustantiva, participación plena y efectiva**, así como la **interseccionalidad** lo que obliga a entidades públicas, privadas y sociales a orientar la creación de políticas públicas, leyes y servicios que aseguren el **ejercicio efectivo de todos los derechos humanos**.⁶

Las implicaciones de este modelo son que obliga a los Estados a **remover barreras, adoptar acciones afirmativas, garantizar ajustes razonables y aplicar el diseño universal** superando visiones asistencialistas y medicalizadas, reconociendo la diversidad como parte de la condición humana.⁷

Desde esta perspectiva de derechos humanos, la igualdad real o sustantiva entonces, no se limita a tratar igual a quienes son diferentes, sino que impone al Estado la obligación de remover las barreras estructurales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas atendiendo a las diversas condiciones que en diversas ocasiones se traducen en obstáculos para el ejercicio de derechos, de ahí que conviene comprender, para efectos de sustentar la presente iniciativa que las barreras estructurales son precisamente, *obstáculos sistémicos, normativos, institucionales o culturales* que impiden o dificultan el ejercicio pleno de los derechos humanos de ciertos grupos históricamente discriminados, como las personas con discapacidad. Estas barreras no siempre son visibles ni intencionales, pero están *arraigadas en las formas en que se diseñan las leyes, las políticas públicas, los entornos físicos, los servicios y los productos culturales*.

⁶ Sentencia recaída al Amparo en revisión 410/2012. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 21 de noviembre de 2012.

⁷ Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 1, 3, 4 y 5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AD 159/2013; AI 33/2015). Observación General No. 6 del Comité CDPD (2018) sobre igualdad y no discriminación.

En el caso de esta iniciativa, se identifica que las barreras estructurales se manifiestan en el marco legal actual, específicamente en el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, ya que no contempla medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad (con excepción de aquellas con discapacidad auditiva), tales como las que ha analizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de Amparo en revisión 14/2023, en el que se menciona específicamente *el doblaje al español y la audio descripción en las películas proyectadas en salas de cine*, ya que, aunque no exista una prohibición explícita que impida a una persona ciega entrar a una sala de cine, el hecho de que las películas no estén disponibles en dichos formatos implica, en la práctica, que no pueden disfrutar del contenido como cualquier otra persona. Esto restringe su participación en la vida cultural y constituye una exclusión sistemática basada en el diseño mismo del servicio.

Este tipo de exclusión no se resuelve únicamente con accesos físicos (como rampas o señalización en braille), sino con la adaptación de contenidos y formatos, es decir, con accesibilidad comunicativa, sensorial y cognitiva, como lo establece el enfoque de diseño universal.

Eliminar las barreras estructurales implica cambiar no solo el entorno físico o el acceso material, sino modificar las normas, políticas y prácticas institucionales que reproducen la desigualdad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo reconoce al señalar que el Estado debe garantizar medidas que no solo abran el acceso, sino que también permitan el uso efectivo de herramientas de accesibilidad.

En este sentido, la accesibilidad no es un privilegio ni un acto de buena voluntad, sino la adopción de una medida jurídica obligatoria para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México, establece que los Estados deben adoptar medidas apropiadas para asegurar a las personas con discapacidad el acceso y disponibilidad, en igualdad de condiciones con las demás, a entornos físicos, servicios y productos culturales. El artículo 30 de dicha Convención es categórico en señalar que los Estados Parte

deben asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles.

La Observación General No. 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014) refuerza este criterio al afirmar que la accesibilidad *“es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad”*.

Así, garantizar funciones de cine donde se contemplen ajustes razonables y diseño universal, es una obligación internacional que deriva del derecho a la cultura, y no puede ser interpretada como un beneficio opcional.

2. Ajustes razonables.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): *“Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”*.

Este concepto reconoce que la igualdad formal no basta y que, en ocasiones, es necesario realizar modificaciones específicas para remover barreras individuales. No implementarlos, cuando son necesarios y viables, constituye discriminación por motivos de discapacidad (CDPD, art. 5.3).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado diversas líneas jurisprudenciales para dotar de contenido jurídico un concepto que ha ido fortaleciéndose progresivamente, de tal manera que un criterio en que se funda esta iniciativa es el que plantea la Corte:

“Con base en una interpretación armónica de los artículos 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción IX, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 1 de la Ley Federal para

*Prevenir y Eliminar la Discriminación, en relación con los diversos 2 y 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, se advierte que no sólo corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, sino que debe prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad, así como realizar los ajustes razonables, entendidos como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Así, los poderes públicos deben promover, garantizar e impulsar la participación de las personas particulares en la eliminación de dichos obstáculos; esto conlleva la multidireccionalidad de los derechos fundamentales o "eficacia horizontal", entendida como la posibilidad jurídica de hacerlos exigibles no sólo al Estado, sino a los particulares, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. VII/2013 (10a.), de rubro: **"DISCAPACIDAD. PRESUPUESTOS EN LA MATERIA QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR LOS OPERADORES DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO."** Por tanto, no obstante que se trate de un conflicto entre particulares, los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones jurídico-privadas, como lo concluyó la mencionada Primera Sala en la tesis aislada 1a. XX/2013 (10a.), de rubro: **"DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES."**⁸*

De esta forma se comprende que los ajustes razonables permiten transitar progresivamente hacia la accesibilidad y posterior diseño universal, todas medidas adoptadas para el paso de la igualdad formal a la sustantiva, mediante la adopción de medidas diferenciales necesarias para hacer frente a barreras particulares.

⁸ Tesis [A.]: (X Región)3o.4 L . T.C.C. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Undécima Época. Libro 32, Diciembre de 2023, Tomo IV, Página 3960. Registro Digital: 2027867.

3. Diseño universal

El artículo 2 de la CDPD define el diseño universal como: “[e]l diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado”. El “diseño universal” no excluye los dispositivos auxiliares, sino que busca que el entorno esté desde un inicio concebido para la diversidad humana.

El término se asocia con el de diseño sin barreras, mismo que pretende la accesibilidad en los diseños y la tecnología asistida de apoyo y que, además, incluye a las personas con discapacidad.⁹

El propósito del diseño universal es la participación de todas las personas, independientemente de su condición, corporalidad, capacidad, discapacidad, lenguaje, cultura, entre otros aspectos. De esta forma, diseñar para todas las personas implica observar las características de los seres humanos y plantear acciones concretas desde diversas disciplinas, para alcanzar la mayor participación de usuarios, de manera que nadie quede excluido.¹⁰

4. Derechos Culturales y Accesibilidad

De acuerdo con el Comunicado de Prensa 684/24, denominado Estadísticas a Propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 28 de noviembre de 2024, la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, reportó que en México:

⁹ SUÁREZ Estrada, Roxana. Pensar y diseñar en plural. Los siete principios del diseño universal. Revista Digital Universitaria. 1 de abril de 2017. Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en <https://www.revista.unam.mx/vol.18/num4/art30/art30.pdf>

¹⁰ Introducción al Diseño Universal. Unidad de Apoyo para el Aprendizaje. Universidad Nacional Autónoma de México. (s/f). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2923/mod_resource/content/1/UAPA-Introduccion-Diseno-Universal/index.html

- De las 121.6 millones de personas habitantes en el país de 5 años o más, 8.8 millones declaró tener alguna discapacidad (7.2%).
- En orden descendente los porcentajes de concentración de personas con discapacidad por entidad federativa son: Zacatecas 11.2%, Tabasco 10.1%, Durango 9.9%, Oaxaca 8.8%, Guerrero 8.4%, Ciudad de México 8.3%, Hidalgo 8.0%, Veracruz de Ignacio de la Llave 8.0%, Nayarit 7.7%, Nuevo León 7.7%, Yucatán 7.7%, Tamaulipas 7.6%, Colima 7.5%, Campeche 7.4%, Sonora 7.3%, Michoacán de Ocampo 7.2%, Guanajuato 7.1%, Tlaxcala 7.1%, Morelos 7.0%, Querétaro 7.0%, Sinaloa 7.0%, Chihuahua 6.9%, Baja California Sur 6.8%, Baja California 6.7%, Jalisco 6.7%, Puebla 6.4%, Quintana Roo 6.3%, Aguascalientes 6.2%, San Luis Potosí 6.2%, Estado de México 6.1%, Chiapas 5.9% y Coahuila de Zaragoza 5.2%.
- Los porcentajes de actividades con dificultad reportadas son: ver, aun usando lentes 45.8%, caminar, subir o bajar usando sus piernas 40.3%, oír, aun usando su aparato auditivo 19.5%, mover o usar brazos o manos 17.3%, recordar o concentrarse 16.4%, realizar actividades diarias debido a problemas emocionales o mentales 12.0%, bañarse, vestirse o comer 12.0% y hablar o comunicarse 9.2%.
- Finalmente, las causas que originan las diversas dificultades para realizar alguna actividad son: enfermedad 43.9%, edad avanzada 27.2%, nació así 14.0%, accidente 11.4%, por su trabajo 0.9%, violencia 0.6%, por uso de la tecnología 0.1%, otra causa 1.6% y no especificada 0.3%.

Dadas las cifras anteriores, es posible asegurar que en el ámbito cultural, la inaccesibilidad se traduce en exclusión. Una persona ciega no puede entender lo que ocurre en pantalla sin una audiodescripción que le transmita los elementos visuales clave; una persona sorda no puede seguir una película sin subtítulos o lengua de señas; y una persona con discapacidad intelectual necesita lenguaje claro o lectura fácil para comprender ciertos contenidos.

Estas herramientas forman parte del diseño universal, definido por la CDPD como la creación de productos, entornos y servicios que puedan ser utilizados por todas

las personas, sin necesidad de adaptaciones adicionales. Cuando el diseño universal no es suficiente, el Estado debe garantizar ajustes razonables y medidas de nivelación para que todas las personas puedan ejercer de manera plena todos sus derechos.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 4, reconoce expresamente que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos humanos reconocidos en el orden jurídico mexicano, lo que incluye el derecho a acceder plenamente a la cultura. Además, su artículo 3 establece que compete tanto a las instituciones públicas como a las personas físicas y morales de los sectores social y privado que presten servicios, observar los principios que dicha Ley regula en el artículo 5, siendo relevantes para efectos de la presente iniciativa la accesibilidad, igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana como guías para todas las políticas públicas.

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación complementa esta obligación al establecer, en su artículo 4, que toda distinción o restricción que impida o anule el reconocimiento de derechos, entre ellos el derecho a la cultura, constituye un acto de discriminación. En su artículo 9, fracción XXII, prohíbe específicamente *impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos*. En consecuencia, la falta de accesibilidad en las salas de cine no solo es un incumplimiento de estándares internacionales, sino que constituye un acto de discriminación indirecta¹¹ que esta Soberanía debe corregir de forma inmediata.

Algunas experiencias exitosas en diversos países dan cuenta de la progresividad en la implementación de medidas para la igualdad en salas de cine, mediante el uso

¹¹ Entendiendo que la discriminación estructural se produce cuando una norma, práctica o requisito aparentemente neutro, sin intención discriminatoria directa, genera un impacto desproporcionado y negativo en un grupo específico de personas por motivos de su origen, género, raza, religión, orientación sexual, diversidad funcional o cualquier otra condición protegida por ley.

de las tecnologías que se traduce en acciones que fomentan el acceso al cine en condiciones *ad hoc*. Tal es el caso de las siguientes:

En España desde 2003, varias salas cuentan con el sistema “Cine Accesible”, proyecto de la empresa Navarra de Cine, mediante el cual las personas con discapacidad visual reciben un aparato con audífonos a su llegada a la sala, mismo que contiene una audiodescripción de la película que les va “narrando” lo que se ve en la pantalla. Adicionalmente las personas con discapacidad auditiva también cuentan con subtítulos de colores para poder diferenciar a los personajes.¹²

En Alemania, la empresa Sennheiser ha desarrollado tecnología bajo el nombre “Cinema Connect”, ofreciendo una app que permite a las personas con discapacidad visual o auditiva conectarse en el cine a través de una red inalámbrica y acceder a una pista de sonido adicional para obtener una audiodescripción (también llamada videodescripción) o un apoyo auditivo.¹³

En Estados Unidos, existen regulaciones como la *Americans with Disabilities Act* (ADA), que exige que los espacios públicos, incluidos los cines, sean accesibles para personas con diversas discapacidades. Los cines ofrecen opciones como subtítulos abiertos, servicios de audiodescripción, asientos accesibles para sillas de ruedas y bucles magnéticos para personas con discapacidad auditiva. Además, algunas cadenas de cine como AMC ofrecen funciones especiales, en ambientes seguros y de aceptación, con iluminación y sonido amigable para personas que padecen dificultades sensoriales.¹⁴

¹² Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Gobierno de Colombia. El cine, ahora una experiencia posible para las personas con discapacidad gracias a las TIC. Última actualización el 23 de agosto de 2019. Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/102850:El-cine-ahora-una-experiencia-posible-para-las-personas-con-discapacidad-gracias-a-las-TIC>

¹³ Idem.

¹⁴ Avancemos Juntos Texas. AMC Sensory Friendly Films. (s/f). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en <https://www.navigatelifetexas.org/es/services-groups-events/services/amc-sensory-friendly-films1#:~:text=El%20programa%20ofrece%20una%20oportunidad%20especial%20para,invita%20a%20los%20miembros%20del%20p%C3%BAblico%20a>

En Canadá, la Ley de Accesibilidad para Canadá exige que los lugares públicos sean accesibles, y esto incluye a los cines. Las cadenas de cine canadienses como Cineplex ofrecen opciones como dispositivos de asistencia, perros guía, animales de servicio o personas de apoyo.¹⁵

En Chile en el año 2020 se propuso una iniciativa por parte del Centro de Extensión Palacio Pereira junto a Chileactores con Fundación Gestionarte y el patrocinio de Senadis, para implementar un ciclo de Cine inclusivo a través del visionado de destacadas películas chilenas que fueron adaptadas a Subtítulos descriptivos, Audiodescripción y de Lengua de señas chilena, ampliando de esta manera el acceso al patrimonio cinematográfico nacional. La iniciativa se desarrollará en el auditorio del Palacio Pereira y comenzará con dos funciones infantiles, considerando las vacaciones escolares.¹⁶

Como se observa, la progresividad para el acceso a bienes culturales, tal como lo es el acceso a las películas proyectadas en cine, inicia con medidas que propicien la inclusión hasta lograr el diseño universal. La experiencia de los países comentados párrafos arriba demuestra que teniendo a la tecnología como aliada es posible generar espacios culturales donde todas las personas puedan ejercer sus derechos.

Ahora bien, como se ha señalado previamente, existe normatividad nacional y convencional que desarrolla las medidas de inclusión y diseño universal para que las personas ejerzamos nuestros derechos, no obstante, en atención al principio de interpretación conforme, se hace necesaria una armonización legislativa que dote de contenido práctico el ejercicio de derechos humanos, en este caso, del derecho a la cultura mediante el cine, aún cuando la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, faculta a la Secretaría de Cultura a impulsar que las personas con discapacidad cuenten con facilidades necesarias para acceder y

¹⁵ Cineplex.com Accessibility. (2015). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en <https://www.cineplex.com/theatres/accessibility>

¹⁶ Chile Cultura. Ciclo de cine inclusivo en Palacio Pereira. (s/f). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en <https://chilecultura.gob.cl/events/14995/>

disfrutar de los servicios culturales, se hace necesaria una revisión de la normativa cultural, entre la que se encuentra la Ley Federal de Cinematografía, a efecto de fortalecer esta legislación que en su origen no contemplaba las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni mucho menos los derechos de las personas con discapacidad en tanto los conceptos para la igualdad sustantiva no habían sido objeto del desarrollo y contenido jurídico y práctico con que hoy si contamos.

En ese tenor, la iniciativa que ahora se presenta no debe considerarse como una duplicidad con otras normas, sino más bien, debe concebirse como un proceso de armonización normativa¹⁷ nacional y cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de tal manera que la reforma que aquí se propone busca armonizar el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), artículos 2, 9 y 30; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 15; el Protocolo de San Salvador, artículo 14; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, que prohíbe toda forma de discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, la Ley General para la Inclusión de

¹⁷ La armonización legislativa o normativa significa hacer compatibles las disposiciones federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos humanos que se pretende incorporar o que ya han sido incorporados al ordenamiento interno con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos. Esta acción puede suponer la derogación de normas específicas, la abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra o la adición de nuevas normas o su simple reforma para adaptarlas al contenido del tratado o para permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación, inclusive la creación de órganos públicos, de procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones administrativas. La armonización legislativa en materia de derechos humanos no debe ser considerada como una simple actividad optativa para las autoridades federales y las Entidades federativas pues es un deber jurídico derivado de los propios tratados que han sido incorporados al orden jurídico nacional y lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°. Fuente: Cámara de Diputados. ¿Qué es la Armonización Legislativa?. (s/f). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de_estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01d_seguimiento_a_iniciativas_y_proceso_de_armonizacion_legislativa/01c_proceso_de_armonizacion_legislativa

las Personas con Discapacidad, artículos 3, 4 y 6; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículos 4 y 9.

Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo 29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y demás instrumentos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deja establecido que la discapacidad es una categoría protegida por la Convención Americana.¹⁸

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que, negar ajustes razonables o excluir el diseño universal en los servicios culturales, como ocurre con la falta de doblaje al español y audio descripción en salas de cine, constituye una forma de discriminación indirecta y una violación al principio de igualdad sustantiva.

La inclusión de estas medidas en la Ley Federal de Cinematografía no es una opción, sino una obligación jurídica que deriva de tratados internacionales vinculantes para México, de su Constitución, y de una vasta normativa nacional y local. Solo así podrá garantizarse el ejercicio pleno y equitativo de los derechos culturales de las personas con discapacidad.

Atendiendo a las razones expuestas, es que presentamos ante esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Párrafo Segundo al artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía. A continuación, se plasma el contenido de la propuesta.

¹⁸ Corte IDH. Cuadernillos de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 14. Igualdad y No Discriminación (2021). Consultado el 21 de abril de 2025. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo14_2021.pdf

LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFIA	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
<p>ARTICULO 8o.- (...)</p> <p>Sin correlativo</p>	<p>ARTICULO 8o.- (...)</p> <p>En la exhibición de las películas, las salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces, deberán implementar ajustes razonables y medidas de diseño universal, que permitan a las personas con discapacidad acceder al contenido de las obras cinematográficas en diversos horarios a lo largo del día y garantizar su derecho a la cultura, sin perjuicio de la obligación establecida en el párrafo anterior de exhibir las películas en su versión original y subtituladas al español. La denegación de estos ajustes se considerará como discriminación.</p>
	<p style="text-align: center;">Transitorios</p> <p>PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p>SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y demás disposiciones que deriven de esta.</p> <p>TERCERO.- Los exhibidores contarán con un plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para implementar los ajustes razonables y medidas de diseño universal que hagan posible su debido cumplimiento.</p>

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se Adiciona un Párrafo Segundo al Artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía

ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, para quedar como sigue:

ARTICULO 8o.- (...)

En la exhibición de las películas, las salas cinematográficas o lugares que hagan sus veces, deberán implementar ajustes razonables y medidas de diseño universal, que permitan a las personas con discapacidad acceder al contenido de las obras cinematográficas en diversos horarios a lo largo del día y garantizar su derecho a la cultura, sin perjuicio de la obligación establecida en el párrafo anterior de exhibir las películas en su versión original y subtituladas al español. La denegación de estos ajustes se considerará como discriminación.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Federal contará con un plazo de sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para modificar el Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y demás disposiciones que deriven de esta.

TERCERO.- Los exhibidores contarán con un plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para implementar los ajustes razonables y medidas de diseño universal que hagan posible su debido cumplimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de junio de 2025.

Dip. Alma Lidia de la Vega Sánchez
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Alma Delia Navarrete Rivera
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Delhi Miroslava Shember
Domínguez
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Dora Alicia Moreno Méndez
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Gissel Santander Soto
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Hilda Araceli Brown Figueredo
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. María Fabiola Karina Pérez
Popoca
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Melva Carrasco Godínez
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Monica Fernández Cesar
Grupo Parlamentario de MORENA

Dip. Omar Antonio Borboa Becerra
Grupo Parlamentario del PAN

Dip. Ana Erika Santana González
Grupo Parlamentario del PVEM

Dip. José Alejandro Aguilar López
Grupo Parlamentario del PT

Dip. Santiago González Soto
Grupo Parlamentario de PT

Dip. Juan Antonio Meléndez
Ortega
Grupo Parlamentario del PRI